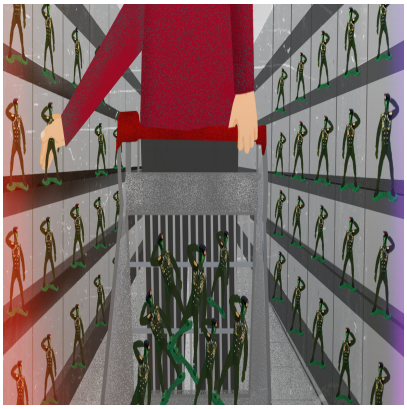

El Club de los 35: cÃ³mo Venezuela comprÃ³ la lealtad de sus generales

DescripciÃ³n

armando.info

Escasez extrema de alimentos y medicinas, hiperinflaciÃ³n, represiÃ³n polÃtica y escÃ¡ndalos de corrupciÃ³n: una crisis tan compleja podrÃa haber doblegado a mÃ¡s de un gobierno. Pero no al venezolano, donde altos oficiales del ejÃ©rcito han sido recompensados por mantener el statu quo, incluso mientras el paÃs se hunde en una espiral de ruina econÃ³mica.

Una investigaciÃ³n de Occrp (Organized Crime and Corruption Reporting Project) expone los nexos financieros entre la administraciÃ³n del presidente NicolÃ¡s Maduro y una camarilla de generales que estÃ¡n detrÃ¡s de empresas privadas que recibieron lucrativos contratos estatales y otros beneficios. Para algunos analistas, este tipo de retribuciones son clave para asegurar la lealtad al rÃ©gimen de Maduro, en medio de una situaciÃ³n polÃtica y econÃ³mica que se deteriora.

Una serie de documentos internos del EjÃ©rcito Bolivariano, conocidos por Occrp, fueron el punto de partida de la investigaciÃ³n. Un equipo de reporteros luego revisÃ³ registros empresariales y de propiedad, tanto en Venezuela como en Estados Unidos. TambiÃ©n entrevistaron a varios oficiales con conocimiento sobre empresas relacionadas con generales. Occrp tuvo ademÃ¡s acceso a una copia completa del Registro Nacional de Contratistas (RNC) del 2017, antes de que el gobierno decidiera eliminar buena parte de la informaciÃ³n que estaba disponible.

Los documentos revelan por primera vez que, para 2019, Venezuela contaba con 312 generales activos en el EjÃ©rcito, la rama mÃ¡s poderosa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb). Casi un tercio de estos altos oficiales estÃ¡n vinculados a empresas que estÃ¡n habilitadas para hacer negocios con el gobierno. De estos, 35 son socios o estÃ¡n en juntas directivas de compaÃ±Ãas privadas que aparecen en el RNC. La investigaciÃ³n se centrÃ³ en este grupo, que OCCRP bautizÃ³ como El Club de los 35.

Los miembros del Club de los 35 se relacionan con 41 empresas privadas habilitadas para contratar con el Estado. Fueron fundadas a partir de 2004 y se concentran en sectores econÃ³micos clave como la construcciÃ³n, la alimentaciÃ³n, el transporte y el petrÃ³leo. En total, obtuvieron 220 contratos a lo largo de los aÃ±os. TambiÃ©n se han involucrado en actividades tan diversas como la publicidad, la venta de equipos de salud, la importaciÃ³n de juguetes y el turismo.

â??Se convierte en una especie de doctrina militar que algunos oficiales creen una empresaâ?•, dijo Pedro Mendoza, un ex teniente de la Guardia Nacional Bolivariana, otra rama de las Fanb, que decidiÃ³ abandonar su paÃs en 2019 y cruzÃ³ la frontera hacia Colombia.

Mendoza describiÃ³ la actitud de la administraciÃ³n Maduro hacia sus generales como: â??TÃº me proteges, me mantienes en el poder y yo te doy a ti la posibilidad de que tengas beneficios econÃ³micosâ?•.

El presidente de Venezuela NicolÃ¡s Maduro participa en un ejercicio militar en Fuerte Tiuna, un complejo militar en Caracas, el 24 de febrero de 2018. CrÃ©dito: REUTERS/Marco Bello / OCCRP

Las ventajas del club

Una mirada mÃ¡s profunda muestra que el estilo de vida de los miembros del Club de los 35 es incompatible con sus sueldos. Occrp tuvo acceso a nÃ³minas del EjÃ©rcito Bolivariano, que en Venezuela no son pÃºblicas, y muestran que un teniente gana en promedio 6,30 dÃ³lares mensuales, mientras que el salario de un general alcanza sÃ³lo 8,90 dÃ³lares.

Como en el resto de la economÃa venezolana, los salarios de los militares han venido perdiendo su poder adquisitivo. SegÃºn el Fondo Monetario Internacional, Venezuela es el paÃs del mundo que sin estar en guerra o experimentando un desastre natural, ha sufrido el mayor colapso econÃ³mico en los Ãºltimos 50 aÃ±os. En 2019, se registrÃ³ una hiperinflaciÃ³n de 9.585,50%. La proporciÃ³n de la poblaciÃ³n que vive en la pobreza extrema saltÃ³ de 10% en 2014 a 85% en 2018.

armando.info

Estos bajos salarios, frutos de la debacle econÃ³mica, crearon un incentivo adicional para que los oficiales completaran sus ingresos con empresas alternas, segÃºn explicÃ³ Pedro Mendoza, el ex teniente de la Guardia Nacional Bolivariana, que ahora estÃ¡ en Colombia y cuyo corte de pelo austero y postura firme son signos visibles de su pasado militar.

armando.info

El entonces candidato presidencial Hugo ChÃ¡vez con su esposa MarÃa Isabel, saludan a miles de simpatizantes en la clausura de su campaÃ±a en Caracas el 2 de diciembre de 1998.CrÃ©dito: AP Photo / Timothy Padek / OCCRP

â??Lo que se percibe hoy en dÃa por nÃ³mina, por sueldo bÃ¡sico, no alcanza para nadaâ?•, dijo durante la entrevista realizada en una pollerÃa en el municipio de Villa del Rosario, que queda a solo 10 minutos de la frontera con Venezuela. â??Por eso, los altos oficiales tienen sus negocios en paraleloâ?•.

El mismo ministro de defensa, el general Vladimir Padrino LÃ³pez, ganaba oficialmente menos de 8 dÃ³lares al mes en septiembre del aÃ±o pasado. Pero, segÃºn una investigaciÃ³n de Occrp que es parte de esta serie, Padrino tiene vÃnculos con una constelaciÃ³n de empresas y propiedades en Venezuela y en Estados Unidos que valen varios millones de dÃ³lares.

Uno de los miembros del Club de los 35, el general HernÃ¡n Akhnanton Noguera MejÃa, es quien concentra el mayor nÃºmero de contratos estatales: 47. A travÃ©s de su empresa de catering, la AsociaciÃ³n Cooperativa Andina de Festejos, organizÃ³ un asado para 600 funcionarios del Seniat, el servicio nacional de aduanas e impuestos. En un acto de entrega de patrullas y motocicletas a policÃa regionales en el marco de la Gran MisiÃ³n A Toda Vida Venezuela, le alquilaron carpas e incluso palmeras para la ceremonia. La empresa fue fundada en 2010, solo un mes despuÃ©s de que lo ascendieran al grado de teniente coronel.

armando.info

Aunque, segÃºn los registros filtrados a Occrp, Noguera solo gana alrededor de 9 dÃ³lares mensuales, en su perfil de Facebook publicÃ³ informaciÃ³n sobre vacaciones en el extranjero, incluyendo viajes a Italia, EspaÃ±a, Israel, Malta y MÃ³naco. En 2010, estuvo en un crucero por el MediterrÃ¡neo.

Otro de los miembros del Club de los 35 es el general JesÃºs Emilio VÃ¡squez Quintero, actual fiscal general de la FiscalÃa General Militar, instituciÃ³n que ha sido vinculada a la persecuciÃ³n judicial interna en las Fuerzas Armadas y que incluso, cÃ³mo lo han denunciado ONG de derechos humanos, ha iniciado juicios contra civiles. En 2005 se fundÃ³ la AsociaciÃ³n Cooperativa El Tepuy, en la que Ã©l y su esposa Tibisay Villalobos aparecen con el 40% de las acciones.

La empresa obtuvo 41 contratos con numerosas instituciones estatales. Para la 51Âª Brigada Domingo Sifontes reparÃ³ equipos de vehÃculos y suministrÃ³ materiales de ferreterÃa. Le vendiÃ³ neveras y equipos mÃ©dicos al Hospital Universitario de Caracas, uno de los principales centros de salud del paÃs. El ministerio para la Cultura le comprÃ³ fotocopiadoras Canon, mientras que el ministerio para el Servicio Penitenciario adquiriÃ³ materiales de ferreterÃa de la compaÃ±Ãa. Incluso le entregÃ³ tambores de desengrasantes para uso mecÃ¡nico y tambores de solvente dielÃ©ctrico a la Industria Venezolana de Aluminio.

Occrp visitÃ³ las cuatro direcciones de la AsociaciÃ³n Cooperativa El Tepuy que figuran en el RNC. En una funcionaba una tienda de repuestos de automÃ³viles, otra correspondÃa a un edificio residencial, en otra la empresa no figuraba en el directorio del edificio, mientras que en la Ãºltima no habÃa signos de que ahÃ funcionara la empresa.

Juan GuaidÃ³ habla con sus partidarios en un evento en Caracas, el 2 de marzo de 2019, poco despuÃ©s de haber sido nombrado presidente interino. CrÃ©dito: Leo Alvarez / Sputnik via AP / OCCRP

SegÃºn la ConstituciÃ³n y la ley anticorrupciÃ³n, es ilegal que funcionarios pÃºblicos utilicen su cargo en beneficio personal, ya sea directamente o a travÃ©s de un tercero asociado, como un familiar. Eso incluye capitalizar las conexiones personales para obtener contratos estatales.

â??No ha habido voluntad para revisar quÃ© estÃ¡ pasando con esos oficiales que estÃ¡n vinculados a un sector polÃtico y que manejan enormes cantidades de dineroâ?•, dijo el abogado de derechos humanos Alonso Medina Roa, quien ha defendido a varios oficiales acusados de rebelarse contra el gobierno de Maduro.

â??El funcionario pÃºblico tiene que ofrecer dedicaciÃ³n exclusiva, no puede contratar con el Estado, no puedes generar otro tipo de actividad comercialâ?•, aÃ±adiÃ³.

Famiempresas

armando.info

En algunos casos, Occrp encontrÃ³ pruebas de que los generales crearon empresas en los mismos sectores econÃ³micos en los que se desenvuelven.

En 2011, cuando empezÃ³ a trabajar en el palacio presidencial de Miraflores, el general JesÃºs Rafael Villamizar GÃ³mez se convirtiÃ³ en secretario y accionista de la empresa de seguridad AsociaciÃ³n Cooperativa Seguridad y ProtecciÃ³n Universal 1204. En 2016, fue nombrado comandante de la Brigada Especial de ProtecciÃ³n y Aseguramiento Presidencial, un puesto clave tras las repetidas denuncias de conspiraciones para asesinar a Maduro (el general Villamizar no contestÃ³ a las preguntas enviadas).

FEl exsargento Harry Solano, contesta las preguntas de los reporteros.CrÃ©dito: RamÃ³n Campos Iriarte / OCCRP

Sin embargo, cuando Occrp visitÃ³ la sede de la empresa que figura en el RNC, encontrÃ³ una residencia privada. El vigilante de la unidad dijo que ahÃ no opera, ni ha operado, ninguna compaÃ±Ã-a.

Algunos de los miembros del Club de los 35 incluyeron a familiares en sus empresas para mantener sus negocios en secreto. Occrp encontrÃ³ por lo menos cinco generales con parientes en puestos clave en sus compaÃ±Ãas. El general Alejandro RamÃ³n Maya Silva, director del despacho del comandante general del EjÃ©rcito, estÃ¡ vinculado a dos empresas: Aquila Grupo Empresarial, C.A. y La Granja Integral, C.A. Esta Ãºltima, involucrada en el negocio agrÃcola, fue fundada en 2017 cuando Maya Silva ya era general. En el consejo de administraciÃ³n figuran dos de sus hijos.

En algunos casos, las esposas de estos altos oficiales tienen sus propias sociedades en el registro de contratistas. Es el caso del general Carlos Alessandro Cestari Infantini, que en 2016 se convirtiÃ³ en gerente general de tecnologÃa de informaciÃ³n y comunicaciones del Seniat, el instituto nacional de aduanas e impuestos. El alto oficial y su esposa, Mariangel Arruebarrena, son dueÃ±os de Geringtel Inversiones, una empresa de informÃ¡tica, construcciÃ³n y publicidad que cuenta entre sus clientes al ministerio de Defensa, el Banco del Tesoro y el Saime, el organismo de identificaciÃ³n y migraciÃ³n.

armando.info

Migrantes venezolanos en el puente SimÃ³n BolÃvar, que conecta a Venezuela y Colombia y es el principal punto de entrada de cientos de personas que huyen del paÃs tras el colapso econÃ³mico. 14 de agosto de 2019.CrÃ©dito: RamÃ³n Campos Iriarte / OCCRP

La esposa de Cestari es ademÃ¡s dueÃ±a de T.C.J. Inversiones, una empresa constructora que cuenta entre sus clientes a Mercal, al ministerio de Defensa, a la fundaciÃ³n de Desarrollo Nacional Aeroportuario y Portuario y al propio Seniat.

Occrp enviÃ³ correos electrÃ³nicos a todos los miembros del Club de los 35. Ã?nicamente dos respondieron.

La informaciÃ³n sobre las compaÃ±Ãas vinculadas a los generales viene del Registro Nacional de Contratistas (RNC), al que las empresas se supone deben afiliarse para obtener contratos con el Estado. Hasta hace tres aÃ±os, una multitud de datos estaban a disposiciÃ³n del pÃºblico, incluyendo la direcciÃ³n de las empresas, la identidad de los accionistas, de los socios y de los miembros de la junta directiva, asÃ como detalles de los contratos pÃºblicos de dicha empresa.

Pero en agosto de 2017, el gobierno limitÃ³ severamente la informaciÃ³n del RNC, y ya no es posible saber quÃ© personas tienen vÃnculos con las empresas contratistas ni quÃ© contratos han obtenido. De la noche a la maÃ±ana, Venezuela se volviÃ³ casi tan opaca como una jurisdicciÃ³n offshore.

"La contrataciÃ³n del Estado es realmente una caja negra en Venezuela, no hay acceso", explicÃ³ AndrÃ©s CaÃ±izalez, investigador de la Universidad CatÃ³lica AndrÃ©s Bello y experto en temas de transparencia.

Occrp pudo obtener una copia de la base de datos completa, tal y como estaba justo antes de ser retirada. El gobierno declarÃ³ que tomÃ³ esa medida porque la informaciÃ³n del registro era usada por bandas criminales para extorsionar y secuestrar.

armando.info

Pero CaÃ±izalez dijo que el verdadero objetivo de la decisiÃ³n es â??impedir que se siguieran haciendo investigaciones donde en varios casos se habÃan develado los nexos familiares de contratistas del Estado con altos funcionariosâ?•.

CrÃ©dito: Midhat KapetanoviÄ? / OCCRP

La esencia del madurismo

La incursiÃ³n militar en la economÃa venezolana comenzÃ³ hace dos dÃ©cadas, con el ascenso al poder de Hugo ChÃ¡vez, un ex teniente coronel del ejÃ©rcito que fue elegido presidente en 1998.

Hasta ese momento, despuÃ©s de que terminara el gobierno militar de 1958, las fuerzas armadas cumplÃan con sus misiones habituales como la defensa nacional y el control del orden pÃºblico. Incluso estaba prohibido que votaran.

ChÃ¡vez impulsÃ³ una nueva alianza, que bautizÃ³ â??cÃvico-militarâ?• y lanzÃ³ el Plan BolÃvar 2000 con un presupuesto de 114 millones de dÃ³lares, en el que miles de soldados participaron en obras pÃºblicas como la reconstrucciÃ³n de carreteras y remodelaciÃ³n de escuelas. En virtud de la nueva ConstituciÃ³n, que se aprobÃ³ a finales de 1999, los militares fueron encargados de impulsar el desarrollo nacional y el presidente asumiÃ³ la potestad de decidir sobre el ascenso de los oficiales.

Tras el fallido golpe de estado de 2002, ChÃ¡vez incrementÃ³ la participaciÃ³n de oficiales de su confianza en el manejo de la economÃa. Con el tiempo, altos oficiales militares tomaron el control de los puertos, asÃ como de la estatal PetrÃ³leos de Venezuela S.A. (PDVSA), la principal fuente de divisas del paÃs.

En 2005 entrÃ³ en vigor la ley orgÃ¡nica de las fuerzas armadas destinada a "fortalecer la integraciÃ³n cÃvico-militar". Incluso se empezÃ³ a reclutar civiles en un nuevo cuerpo militar hÃbrido: las Milicias Bolivarianas.

armando.info

En paralelo, altos oficiales empezaron a ganar protagonismo en el mundo de los negocios. En 2005, segÃºn muestran los registros, los miembros del Club de los 35 inscribieron siete empresas, mÃ¡s que en cualquier aÃ±o anterior o posterior.

Cuando el presidente Maduro asumiÃ³ su cargo en 2013, tras la muerte de ChÃ¡vez, ampliÃ³ aÃºn mÃ¡s el papel de los militares en la vida civil. En 2018, siete de los 23 gobernadores de Venezuela son oficiales, activos o retirados. AdemÃ¡s, nueve militares eran parte de su gabinete. Los militares tambiÃ©n dirigÃan por lo menos 60 empresas pÃºblicas.

Los oficiales con intereses econÃ³micos constituyen la â??esencia del madurismoâ?•, segÃºn Javier Corrales, catedrÃ¡tico de ciencia polÃtica y experto en LatinoamÃ©rica en el Amherst College de Estados Unidos.

â??Eso es mÃ¡s importante hoy que en cualquier momento bajo ChÃ¡vez, y eso que ChÃ¡vez fue el inventor de aquello de la alianza cÃvico-militar de los 2000â?•, dijo en un correo electrÃ³nico.

Para Corrales, hay tres tipos de â??mili-empresariosâ?•: los que dirigen empresas estatales; los oficiales en servicio y retirados que tienen empresas privadas que hacen negocios con el Estado; y militares involucrados en negocios ilegales. â??A ninguno de estos grupos les parece bien una transiciÃ³n hacia un rÃ©gimen no chavistaâ?•, seÃ±ala Corrales.

Debido a severas restricciones para realizar investigaciones periodÃsticas en Venezuela, es difÃcil determinar si miembros del Club de los 35 estuvieron involucrados en prÃ¡cticas corruptas. Sin embargo, oficiales disidentes que huyeron del paÃs, han contado cÃ³mo empresas de generales venezolanos se aprovechan de los fondos pÃºblicos.

Lealtad condicionada

Antes de que Harry Solano cruzara la frontera con Colombia, era sargento de la Guardia Nacional Bolivariana. Pero lo que calificÃ³ de corrupciÃ³n endÃ©mica, que le tocÃ³ ver de primera mano cuando trabajaba en empresas dirigidas por militares o en programas gubernamentales, lo llevÃ³ a organizar el efÃmero levantamiento armado de Cotiza en enero de 2019.

Cuenta que en Sidor, el principal complejo siderÃºrgico del paÃs, le ordenaron cargar varillas de acero corrugado (cabillas) a camiones que eran de un general. â??La mafia que habÃa con las cabillas, era impresionanteâ?•, le dijo Solano a Occrp, hoy residente en el exterior. HuyÃ³ despuÃ©s de que el alzamiento fracasara. ExplicÃ³ que Ã©l sacaba las cabillas y el alto oficial las metÃa en su empresa y luego las vendÃa y exportaba.

Fue testigo de esquemas similares cuando era inspector de la Gran MisiÃ³n Vivienda Venezuela, un proyecto del gobierno para construir casas de interÃ©s social, donde vio cÃ³mo se saquearon materiales de construcciÃ³n importados de China. â??Empiezo a ver en la MisiÃ³n Vivienda cÃ³mo se robaban los recursos, las cabillas, las puertas, el cemento, se los robaban para bachaqueÃ¡rselo (revenderlo) a las empresas privadas. Llegaban cabillas de China, puertas principales de China para las casasâ?•, seÃ±alÃ³.

armando.info

â??Te digo, de 100 toneladas de cabilla que en un momento llegaron, una tonelada solamente fue para la MisiÃ³n Vivienda en el estado AnzoÃ¡tegui. Las 99 toneladas que faltaron, se perdieronâ?•, dijo el exsargento.

SegÃºn Solano, que fue escolta de varios generales, este tipo de corrupciÃ³n explica por quÃ© los oficiales de alto rango todavÃa apoyan al gobierno. â??Si el rÃ©gimen cae, los oficiales dejan de percibir dinero...No hay nada ideolÃ³gico, todo es interÃ©s del dineroâ?•.

Otro exteniente que huyÃ³ a Colombia, y que pidiÃ³ no ser identificado por temor a represalias contra sus familiares que viven en Venezuela, dijo que algunos generales que dirigen programas de vivienda crean empresas que luego se ganan contratos pÃºblicos con las diferentes â??misionesâ?• sociales.

"La lealtad hacia el rÃ©gimen de Maduro es obtener algÃºn beneficio. Yo obtengo beneficios del rÃ©gimen y yo estoy con el rÃ©gimenâ?•, indicÃ³. â??Eso es la lealtad, por eso es que no se volteanâ?•.

*Puedes leer el perfil de los 35 generales en el portal de Occrp.

****Esta investigaciÃ³n fue realizada por el Occrp (Organized Crime and Corruption Reporting Project) y fue publicada en conjunto por varios medios de comunicaciÃ³n venezolanos, incluido Armando.Info, como parte de una alianza periodÃstica para develar la corrupciÃ³n.*

Fecha de creaciÃ³n
2020/04/12